



NECESIDADES EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA DE CANARIAS ANTE LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LO 1/2025

1. ANTECEDENTES

1.1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LO 1/2025. LA ESPECIALIZACIÓN COMO MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN UN TERRITORIO INSULAR Y CON LA MAYOR LITIGIOSIDAD A NIVEL NACIONAL

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, además de modificar la estructura y organización de los órganos jurisdiccionales, mediante la previsión, regulación e impulso de la puesta en marcha de los tribunales de instancia, introduce relevantes modificaciones en el ámbito competencial de los actuales juzgados que atienden asuntos relativos a **violencia sobre la mujer**, esto es, en los tribunales de instancia, secciones de violencia sobre la mujer o plazas judiciales de las secciones de instrucción o mixtas que conozcan de los asuntos en materia de violencia sobre la mujer.

En concreto se modifica el art. 89 LOPJ, que amplía la competencia de las secciones de violencia sobre la mujer o plazas judiciales de las secciones de instrucción o mixtas que conozcan de los asuntos en materia de violencia sobre la mujer, extendiéndola a *la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer*, así como de los asuntos civiles (del art. 89.6 LOPJ) vinculados (en los términos del art. 89.7 LOPJ) a violencia de género y violencia sexual.

El aumento de competencias hace imperativo evaluar su impacto en los órganos jurisdiccionales de Canarias, analizando y señalando las necesidades de cada partido judicial al respecto, con la finalidad de elevar propuestas para su debida atención al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias.

Esta tarea debe acometerse de forma urgente toda vez que la disposición adicional trigésimo octava de la LO 1/2025, en su apartado tercero, preceptúa que la atribución de competencias en materia de violencia sexual a los juzgados de violencia sobre la mujer, prevista en el apartado veintiocho del artículo 1, así como las modificaciones del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del apartado uno del artículo veinte de la 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y de la letra h) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, entrarán en vigor a los nueve meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La LO 1/2025 también modifica el art. 89 bis LOPJ, precepto que prevé la creación de secciones de **violencia contra la infancia y la adolescencia** en los tribunales de instancia. Esta fórmula viene funcionando en el partido de Las Palmas de Gran Canaria vía normas de reparto con excelentes resultados.

El aumento de competencias y el estudio de necesidades que se consigna en este informe debe ponerse en relación con la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia, debiéndose adoptar las medidas necesarias a fin de que los mismos nazcan con la estructura y organización adecuada para atender todos los asuntos, de manera destacada aquellos que requieren de una especial atención como ocurre en el caso de los referidos a violencia sobre la mujer, violencia sexual y violencia contra la infancia y la adolescencia, garantizándose, en todo caso, un servicio especializado y de calidad.

Especialización indispensable, promovida por la propia LO 1/2025, que, en un territorio como el canario, marcado por su inherente insularidad, así como por ser, durante los últimos seis años, el que registra la tasa de litigiosidad a nivel nacional, conlleva la necesidad de tener en cuenta, junto con los criterios cuantitativos ordinarios, otros factores o criterios cualitativos de especial consideración que permitan acometer la aludida y necesaria especialización y así prestar un servicio de calidad a toda la ciudadanía.

1.2. COMARCALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS REFERIDOS A VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EN LAS ISLAS DE TENERIFE Y GRAN CANARIA

1.2.1. TENERIFE

a) Comarcalizaciones vigentes

Conforme al art. 8 del Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial se dispuso que *de acuerdo con lo*

establecido en el artículo 87 bis, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se determina la extensión de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife a los partidos judiciales de San Cristóbal de La Laguna y de Güímar; del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona al partido judicial de Granadilla de Abona.

Tales comarcalizaciones relativas a la isla de Tenerife entraron en funcionamiento el 1 de enero de 2023, conforme a la disposición final tercera de la misma norma.

b) Necesaria agrupación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz, así como comarcalización posterior del conocimiento de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer en la zona norte de la isla de Tenerife.

La Sala de Gobierno del TSJ de Canarias ya dispuso en su acuerdo 105.6/2022, de fecha 8 de abril de 2022:

Dada cuenta por el presidente del acuerdo de la Sección de Planta y Oficina Judicial, sobre propuesta de agrupación de los juzgados de violencia sobre la mujer de San Cristóbal de la Laguna, Güímar y Puerto de la Cruz, a los de Santa Cruz de Tenerife, la Sala de Gobierno acusa recibo y acuerda poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, para su toma en consideración, por si se estimase procedente, un hecho nuevo y relevante, como es la iniciativa puesta en marcha desde esta Sala de Gobierno (acuerdo de 11 de marzo de 2022, expediente gubernativo 24/2022), a propuesta de las

juntas de jueces respectivas, y que cuenta con el apoyo de todas las administraciones y operadores jurídicos afectados, en orden a la agrupación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz, partido judicial este último que, según el acuerdo de comarcalización, quedaría integrado, en cuanto a los asuntos de violencia sobre la mujer, en el de Santa Cruz de Tenerife, con el que, sin embargo, no es limítrofe, al estar enclavado en toda su extensión dentro del de La Orotava.

Tal como se puso de manifiesto, la Sala considera muy positiva la iniciativa de reunificación de estos partidos judiciales y, concretamente, con relación a los asuntos de violencia sobre la mujer, se razona que lo deseable sería que uno de los juzgados resultantes de la reagrupación se hiciera cargo de modo exclusivo y excluyente de tales asuntos, pudiendo extender su jurisdicción incluso, para un mejor servicio, al partido de Icod de los Vinos, quedando así "comarcalizada" la violencia sobre la mujer en la isla de Tenerife en tres áreas: a) norte (Icod, La Orotava, Puerto de la Cruz); b) centro (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Güímar); c) sur (Arona y Granadilla de Abona). Por último, la Sala acuerda remitir al Consejo General del Poder Judicial certificación de este acuerdo y del adoptado en fecha 11 de marzo de 2022, junto con el informe que obra en este último.

Recientemente, se dictó acuerdo 47/2025 de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, en su reunión de 20 de febrero de 2025, en los siguientes términos:

Sobre la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz.

El presidente informa de lo siguiente:

- *El anexo I de la Ley 38/1988, modificado por la LO 1/2025, prevé ya un solo tribunal de instancia (TI) con sede en La Orotava, partido judicial n.º 8 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se incluye el municipio de Puerto de la Cruz (código de municipio 38028) desapareciendo el partido judicial n.º 10 de Santa Cruz de Tenerife, es decir, el partido judicial de Puerto de la Cruz.*
- *El anexo I, en su nueva redacción, establece que el TI de La Orotava tiene 8 plazas con categoría de juez siendo dos de ellas con competencia compartida en materia de violencia sobre la mujer.*
- *Sin embargo, dicho anexo I, al definir la sección penal del TI Santa Cruz de Tenerife, extiende su competencia a los partidos judiciales números 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 y 12, es decir, sigue contemplando de manera separada los partidos judiciales de Puerto de la Cruz (10) y La Orotava (8).*
- *Que la efectividad de la unificación queda supeditada a la aprobación de un real decreto que así lo disponga tal como sale de la disposición final trigésima cuarta de la LO 1/2025: «Establecimiento reglamentario de la fecha de efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. Dentro del año siguiente al de entrada en vigor de esta ley, se establecerá reglamentariamente la fecha de efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, a fin de determinar el conocimiento por los órganos judiciales afectados por dicha modificación de los asuntos asignados y que se encontraran en tramitación hasta su conclusión, las relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como cualquier otro aspecto necesario para la correcta y plena eficacia de la modificación de la demarcación judicial acordada.»*
- *Que, de no dictarse el real decreto de unificación antes del día 1 de julio de 2025, por aplicación de la disposición transitoria primera de la LO 1/2025, en tal fecha deberían constituirse de manera independiente los tribunales de instancia de La Orotava y de Puerto de la Cruz, con los trámites que ello conlleva, que resultarían inútiles una vez acordada la efectividad de la unificación.*

Por todo ello, asumiendo la propuesta del presidente, la Sala acuerda dirigir comunicación al Ministerio de Justicia a fin de que, a la mayor brevedad posible:

- a. Se acuerde la efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, aprobado por la LO 1/2025 en lo que respecta al partido judicial de La Orotava.*
- b. Al contar dicho partido judicial con 8 plazas, se dicte la correspondiente orden ministerial por la que se establezca la elevación a categoría de magistrado/a de las plazas del tribunal de instancia de La Orotava.*
- c. Que, con arreglo al informe y acuerdo previo de esta Sala n.º 84/2022, de 11 de marzo, sobre unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz, máxime teniendo en cuenta la ampliación de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, se cree una plaza más en el Tribunal de Instancia de La Orotava para el conocimiento de los asuntos de dicha clase, plaza que extendería su jurisdicción al partido judicial de Icod de los Vinos, para culminar así el proceso de comarcalización de los asuntos en materia de violencia sobre la mujer en la isla de Tenerife.*

1.2.2. GRAN CANARIA

a) Comarcalizaciones vigentes

El art. 8 del Real Decreto 1170/2023, de 27 de diciembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, y de adecuación de la planta judicial dispuso que *de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 bis, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se determina la extensión de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria al partido judicial de Arucas, de Santa María de Guía de Gran Canaria y de Telde.*

Tal comarcalización entró en funcionamiento el 1 de julio de 2024 conforme a la Orden PJC/492/2024, de 17 de mayo, por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados, correspondientes a la programación de 2023 y se modifica la Orden JUS/1093/2023, de 29 de septiembre.

A su vez, el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana mantiene su Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el cual, conforme a la LO 1/2025, pasará a integrar la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia del mencionado partido judicial.

1.3. NECESARIA SEPARACIÓN DE JURISDICCIONES EN EL PARTIDO JUDICIAL DE PUERTO DEL ROSARIO.

La Sala de Gobierno del TSJ de Canarias dispuso, en su reciente acuerdo 48/2025, en su reunión de fecha 20 de febrero de 2025:

La Sala de Gobierno acuerda reiterar al Ministerio de Justicia la petición de que se proceda a dictar a la mayor brevedad el correspondiente real decreto por el que se disponga la separación de los juzgados de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario, presupuesto indispensable para que se pueda definir y acomodar la estructura de dicho partido judicial a las previsiones de la LO 1/2025.

1.4. NECESIDADES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Por último, como antecedentes a tener en consideración, máxime en atención a las modificaciones introducidas por la LO 1/2025 (nueva redacción del art. 89 bis LOPJ) se debe aludir a las necesidades en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, ya recogidas en acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias n.º 224/2024, adoptado el 4 de julio de 2024:

La Sala de Gobierno aprueba el informe elaborado por la Presidencia sobre propuestas para la especialización de la instrucción de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad, que quedará unido a la presente acta como anexo y, conforme al mismo, acuerda:

1) Proponer al Gobierno de Canarias que, en ejercicio de las competencias que le confiere el art. 91 del Estatuto de Autonomía, plantee al Gobierno de la Nación la adopción de las iniciativas legislativas precisas para que, previa creación de un nuevo juzgado de instrucción en Las Palmas de Gran Canaria, se atribuya al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria competencia exclusiva y excluyente para la instrucción de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad en la isla de Gran Canaria.

2) Proponer al Gobierno de Canarias que, en ejercicio de las competencias que le confiere el art. 91 del Estatuto de Autonomía, plantee al Gobierno de la Nación la adopción de las iniciativas legislativas precisas para que, previa creación de un nuevo juzgado de instrucción en la isla de Tenerife —al que se dotará de idénticos medios que al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria— se atribuya a dicho órgano competencia exclusiva y excluyente para la instrucción de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad en la isla de Tenerife.

3) Instar a la Junta de Jueces de Arrecife a fin de que eleve propuesta a esta Sala para la especialización de uno de los juzgados de instrucción de dicho partido judicial siguiendo el actual modelo del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria, previendo expresamente la dotación de los medios personales y materiales necesarios.

4) Instar a la Junta de Jueces de Puerto del Rosario para que, una vez tenga efectividad la división de jurisdicciones en dicho partido judicial, eleve propuesta de especialización de uno de los juzgados de instrucción de dicho partido judicial siguiendo el actual modelo del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria, previendo expresamente la dotación de los medios personales y materiales necesarios.

5) Interesar a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias la dotación de los medios materiales y personales necesarios para garantizar la efectividad de tales iniciativas en todo el territorio, incluyendo las previsiones contenidas en el informe respecto de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

El informe elaborado por la Presidencia del TSJ de Canarias, mencionado en el acuerdo transcrito, se adjunta al presente como anexo I.

2. DATOS ESTADÍSTICOS POR ISLA Y PARTIDO JUDICIAL TRAS LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LO 1/2025 EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

2.1. METODOLOGÍA

- El presente informe se asienta en datos más recientes en el tiempo, esto es, los relativos a número de asuntos del año 2024.
- Se parte de los datos del año 2024, tabla de asuntos por jurisdicción elaborada por la Sección de Estadística Judicial del CGPJ y obtenida a través del Punto Neutro Judicial.
- Para determinar el volumen de asuntos en materia de violencia sexual se han tenido en cuenta los datos ofrecidos por la Secretaría de Gobierno, procedentes, a su vez, de los LAJ de cada órgano judicial en contraste con los datos que resultan del sistema de gestión procesal Atlante.
- Los datos de violencia contra la infancia y la adolescencia se han obtenido siguiendo el sistema de cálculo expuesto en el informe de la Presidencia del TSJ de Canarias adjunto como anexo I al presente.
- Junto con los datos estadísticos, que marcan el criterio cuantitativo a tener en consideración, se expondrán y valorarán los factores o criterios cualitativos que justifican la necesidad de especialización.

2.2.- GRAN CANARIA

2.2.1. PARTIDO JUDICIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. COMARCALIZACIÓN VIGENTE DE LOS ASUNTOS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TELDE, ARUCAS Y SANTA MARÍA DE GUÍA

El partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria cuenta, actualmente, con tres juzgados de violencia sobre la mujer que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las tres plazas judiciales subsumidas en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

A su vez, cuenta con 8 juzgados de instrucción que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las ocho plazas judiciales subsumidas en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Conforme se ha expuesto en los antecedentes de este informe, desde el 1 de julio de 2024, los juzgados de violencia sobre la mujer de Las Palmas de Gran Canaria conocen también de los asuntos referidos a violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Telde, Arucas y Santa María de Guía.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual correspondientes al año 2024 son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
LAS PALMAS	4232	463	872	5567
TELDE	287	134	133	554
ARUCAS	139	15	57	211
SANTA MARÍA	78	3	33	114
TOTAL				6446

Los datos expuestos implican que, partiendo de los datos del año 2024 y teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, a cada una de las tres plazas judiciales de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria le corresponda el conocimiento de 2149 asuntos, superando, pues, el módulo de 1600 asuntos vigente (Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales), lo que conlleva la **necesidad de creación de una cuarta plaza judicial en la sección, suponiendo que a cada plaza judicial le correspondiera el conocimiento de 1612 asuntos.**

La nueva plaza judicial de la sección de violencia sobre la mujer **no debe surgir de la transformación de una de las plazas judiciales de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia toda vez que en el año 2024 cada uno de los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria tuvo una entrada de 4224 casos, por lo que superan el módulo vigente (3300 asuntos), incluso descontando los delitos sexuales registrados en este partido judicial (872 en total, esto es, 109 por juzgado).**

La necesidad de constitución de secciones de violencia sobre la mujer y que las mismas cuenten con el número adecuado de plazas judiciales es imprescindible a tenor de los siguientes criterios cualitativos que deben tenerse presentes:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Especialización que debe darse tanto en el juzgador/a, como en la estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como la guardia.
- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.
- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.
- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales).
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocida un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de la secciones existentes actualmente, así como a la regulación vigente del Servicio de guardia.

b) VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

En materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, se reproducen en este punto los razonamientos y justificaciones obrantes en el informe, adjunto al presente como anexo I, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias (acuerdo n.º 224/24).

En el mismo se concluía: 1) que un juzgado especializado en violencia sobre menores de ámbito insular tendría en Gran Canaria una carga de trabajo comprendida entre 1187 y 1287 asuntos por año; 2) que se podría decir que la carga sería escasa (aproximadamente el 50% del módulo teórico), pero debe tenerse en cuenta la especial complejidad de la instrucción de este tipo de causas, por lo que no se puede aplicar, sin más, el criterio general que prevé la Orden JUS/1415/2018; 3) que teniendo en cuenta el nivel de ingreso de asuntos de 2023 y el módulo de entrada de los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, dichos juzgados, si el n.º 3 dejara de entrar a reparto y aun contando con la derivación de los aproximadamente 600 asuntos en materia de violencia sobre menores, cada uno de los 7 juzgados de instrucción restantes alcanzaría un porcentaje del 142,7% del módulo de 2018 (4709 asuntos); 4) que, en consecuencia, sería necesario crear un juzgado de instrucción más en Las Palmas de Gran Canaria para llevar a buen fin el proyecto de insularización de la violencia sobre la infancia y la adolescencia sin afectar al normal funcionamiento de los restantes juzgados de instrucción del partido.

Con base en lo anterior se proponía al Gobierno de Canarias que, en ejercicio de las competencias que le confiere el art. 91 del Estatuto de Autonomía, plantee al Gobierno de la Nación la adopción de las iniciativas legislativas precisas para que, previa creación de un nuevo juzgado de instrucción en Las Palmas de Gran Canaria, se atribuya al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria competencia exclusiva y excluyente para la instrucción de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad en la isla de Gran Canaria.

Ahora bien, la necesidad expuesta debe adecuarse a las modificaciones introducidas en la LO 1/2025, en atención a lo dispuesto en el art. 89 bis LOPJ modificado (particularmente a tenor de los apartados 2 y 3 del mencionado precepto), por lo que, consecuentemente, **se acuerda proponer, al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la creación de una nueva plaza judicial en la sección de instrucción del tribunal de instancia de Las Palmas de Gran Canaria y, paralelamente, la creación de una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia en el mencionado tribunal, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Gran Canaria. Sección integrada por una única plaza judicial que se derive de la transformación de la plaza judicial n.º 3 de la sección de instrucción.**

La anterior propuesta se justifica por los siguientes argumentos:

- La creación de una sección propia, en los términos del art. 89 bis LOPJ y de manera coherente con el mandato que establece la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia en su disposición final decimoséptima, permite la debida atención de estos delicados asuntos al garantizar la exclusividad y la especialización.
- Garantiza una atención homogénea de estos asuntos en toda la isla.
- La conversión de la plaza judicial n.º 3 de la sección de instrucción en sección de violencia contra la infancia permite aprovechar el conocimiento y el bagaje de quienes integran el Juzgado de Instrucción n.º 3, órgano pionero en España, cuyas prácticas, protocolos y formas de actuación están dando excelentes resultados y constituyen un referente a nivel nacional e internacional.

2.2.2. PARTIDO JUDICIAL DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

El partido judicial de San Bartolomé de Tirajana cuenta, actualmente, con un juzgado de violencia sobre la mujer que, conforme a la LO 1/2025, pasará a integrarse en una plaza judicial subsumida en la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de San Bartolomé de Tirajana.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual correspondientes a 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
SAN BARTOLOMÉ	1109	146	227	1482
TOTAL				1482

Los datos expuestos implican que, partiendo de los datos del año 2024 y teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, a la plaza judicial de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de San Bartolomé de Tirajana le corresponderá el conocimiento de 1482 asuntos, dentro, pues, del módulo de 1600 asuntos establecido (Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales). No puede desconocerse, sin embargo, la especial complejidad de la instrucción que presentan los asuntos de esta clase que se tramitan en este partido judicial debido a la abrumadora presencia del elemento extranjero.

Así pues, en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana está garantizado, en principio, un servicio de calidad y plenamente especializado en esta materia.

2.3. TENERIFE

2.3.1. PARTIDO JUDICIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. COMARCALIZACIÓN VIGENTE DE LOS ASUNTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA Y GÜÍMAR.

El partido judicial de Santa Cruz de Tenerife cuenta, actualmente, con dos juzgados de violencia sobre la mujer que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las dos plazas judiciales subsumidas en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

A su vez, dicho partido judicial cuenta con 5 juzgados de instrucción que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las cinco plazas judiciales subsumidas en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

Conforme se ha expuesto en los antecedentes del presente, desde 2023, los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife conocen también de los asuntos referidos a violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de San Cristóbal de La Laguna y Güímar.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual correspondientes a 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
S/C TFE	3103	259	502	3864
LA LAGUNA	5	26	369	400
GÜÍMAR	2	0	55	57
TOTAL				4321

Los datos expuestos implican que, partiendo de los datos del año 2024 y teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, a cada una de las dos plazas judiciales de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Santa Cruz de Tenerife le corresponda el conocimiento de 2161 asuntos, superando el módulo de 1600 asuntos

establecido (Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales), lo que conlleva la **necesidad de creación de una tercera plaza judicial en la sección, suponiendo que cada plaza judicial asumiera el conocimiento de 1441 asuntos (próximo al módulo establecido).**

La nueva plaza judicial de la sección de violencia sobre la mujer **no puede proceder de la transformación de una de las plazas judiciales de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia toda vez que en el año 2024 cada uno de los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife tuvo una entrada de 3796 casos, por lo que superan el módulo de 3300 asuntos establecido, incluso descontando los delitos sexuales computados en el partido judicial (502 en total, esto es, 101 por juzgado).**

La necesidad de constitución de secciones de violencia sobre la mujer y que las mismas cuenten con el número adecuado de plazas judiciales es imprescindible a tenor de los siguientes criterios cualitativos que deben que tenerse en cuenta:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Especialización que debe darse tanto en el juzgador/a, como en la estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como el servicio de guardia.
- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.
- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.

- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales)
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocido un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de las secciones existentes actualmente, así como a la regulación vigente del Servicio de guardia.

B) VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

En materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, se reproducen en este punto los razonamientos y justificaciones obrantes en el informe, adjunto al presente como anexo I, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias (acuerdo n.º 224/24).

En el mismo se concluía: 1) que un juzgado especializado en violencia sobre menores de ámbito insular tendría en la isla de Tenerife una carga de trabajo comprendida entre 1105 y 1414 asuntos por año; 2) que se podría decir que la carga sería escasa (aproximadamente el 50% del módulo teórico), pero debe tenerse en cuenta la especial complejidad de la instrucción de este tipo de causas, por lo que no se puede aplicar, sin más, el criterio general que prevé la Orden JUS/1415/2018; 3) que como en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, tanto si el juzgado especializado con competencia insular se ubicara en Santa Cruz de Tenerife como en San Cristóbal de La Laguna, habría que crear un juzgado de instrucción más.

Con base en lo anterior se proponía al Gobierno de Canarias para que, en ejercicio de las competencias que le confiere el art. 91 del Estatuto de Autonomía, plantee al Gobierno de la Nación la adopción de las iniciativas legislativas precisas para que, previa creación de un nuevo juzgado de instrucción en la isla de Tenerife —al que se dotará de idénticos medios que al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria— se atribuya a dicho órgano competencia exclusiva y excluyente para la instrucción de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad en la isla de Tenerife.

Ahora bien, la necesidad expuesta debe adecuarse a las modificaciones introducidas en la LO 1/2025, en atención a lo dispuesto en el art. 89 bis LOPJ modificado (particularmente a atención a los apartados 2 y 3 del mencionado precepto), por lo que, consecuentemente, **se acuerda proponer, al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la creación de una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia, dotada de una nueva plaza judicial, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Tenerife, en el tribunal de instancia de Santa Cruz de Tenerife o en el de San Cristóbal de La Laguna. Sección de violencia contra la infancia y la adolescencia a la que se deberá dotar de los mismos medios con que cuenta actualmente el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria.**

Dicha nueva plaza no puede derivar de la transformación de una de las plazas judiciales de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Santa Cruz de Tenerife o de San Cristóbal de La Laguna toda vez que en el año 2024 cada uno de los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife tuvo una entrada de 3796 casos y los de San Cristóbal de La Laguna 3.224 casos, por lo que superan, en el primer caso, y están muy próximos en el segundo, el módulo de 3300 asuntos establecido.

La anterior propuesta se asienta, a su vez, en los siguientes criterios cualitativos a tener en consideración:

- La creación de una sección propia, en los términos del art. 89 bis LOPJ, implica garantizar la calidad del servicio y una exclusividad/especialización plena en asuntos tan sensibles y complejos, tanto del juzgador/a, como de la oficina judicial, sin verse afectados por otros servicios específicos como el servicio de guardia. Ello máxime tratándose de un supuesto de comarcalización de la competencia a nivel insular.

2.3.2. PARTIDO JUDICIAL DE ARONA

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. COMARCALIZACIÓN VIGENTE DE LOS ASUNTOS DE ARONA Y GRANADILLA DE ABONA

El partido judicial de Arona cuenta, actualmente, con un juzgado de violencia sobre la mujer que, conforme a la LO 1/2025, pasará a convertirse en la plaza judicial subsumida en la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Arona.

A su vez, cuenta con 4 juzgados de instrucción que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las cuatro plazas judiciales subsumidas en la sección de instrucción del tribunal de instancia de Arona.

Conforme se ha expuesto en los antecedentes de este informe, desde el 1 de enero de 2023, el juzgado de violencia sobre la mujer de Arona conoce también de los asuntos referidos a violencia sobre la mujer del partido judicial de Granadilla de Abona.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual correspondientes al año 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
ARONA	2186	249	374	2809
GRANADILLA	2	0	106	108
TOTAL				2917

Los datos expuestos implican que, partiendo de los datos del año 2024 y teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, a la plaza judicial de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Arona le corresponda el conocimiento de 2917 asuntos, superando el módulo de 1600 asuntos establecido (Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales), lo que conlleva la **necesidad de creación de una segunda plaza judicial en la sección, suponiendo que cada plaza judicial tuviera conocimiento de 1459 asuntos (próximo al módulo establecido).**

La nueva plaza judicial de la sección de violencia sobre la mujer **no puede proceder de la transformación de una de las plazas judiciales de la sección de instrucción del tribunal de instancia toda vez que en el año 2024 cada uno de los juzgados de instrucción de Arona tuvo una entrada de 3685 casos, por lo que superan el módulo de 3300 asuntos establecido, incluso descontando los delitos sexuales computados en el partido judicial (374 en total, esto es, 94 por juzgado).**

La necesidad de constitución de secciones de violencia sobre la mujer y que las mismas cuenten con el número adecuado de plazas judiciales es imprescindible a tenor de los siguientes criterios cualitativos que deben tenerse en cuenta:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Especialización que debe darse tanto en el juzgador/a, como en la

estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como el servicio de guardia.

- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.
- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.
- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales)
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocido un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de las secciones existentes actualmente, así como a la regulación vigente del Servicio de guardia.

2.3.3. PARTIDO JUDICIAL DE LA OROTAVA-PUERTO DE LA CRUZ E ICOD DE LOS VINOS

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. UNIFICACIÓN DE LOS PARTIDOS DE LA OROTAVA Y PUERTO DE LA CRUZ. SEPARACIÓN DE JURISDICCIONES. PROPUESTA DE COMARCALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ICOD DE LOS VINOS.

El anexo I de la Ley 38/1988, modificado por la LO 1/2025, prevé ya un solo tribunal de instancia con sede en La Orotava, partido judicial n.º 8 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se incluye el municipio de Puerto de la Cruz (código de municipio 38028) desapareciendo el partido judicial n.º 10 de Santa Cruz de Tenerife, es decir, el partido judicial de Puerto de la Cruz.

El anexo I, en su nueva redacción, establece que el TI de La Orotava tiene 8 plazas con categoría de juez siendo dos de ellas con competencia compartida en materia de violencia sobre la mujer.

Como consta en los antecedentes de la presente, la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, por acuerdo n.º 47/2025, dispuso:

Sobre unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz.

El presidente informa de lo siguiente:

- El anexo I de la Ley 38/1988, modificado por la LO 1/2025, prevé ya un solo tribunal de instancia (TI) con sede en La Orotava, partido judicial n.º 8 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se incluye el municipio de Puerto de la Cruz (código de municipio 38028) desapareciendo el partido judicial n.º 10 de Santa Cruz de Tenerife, es decir, el partido judicial de Puerto de la Cruz.*
- El anexo I, en su nueva redacción, establece que el TI de La Orotava tiene 8 plazas con categoría de juez siendo dos de ellas con competencia compartida en materia de violencia sobre la mujer.*
- Sin embargo, dicho anexo I, al definir la sección penal del TI Santa Cruz de Tenerife, extiende su competencia a los partidos judiciales números 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 y 12, es decir, sigue contemplando de manera separada los partidos judiciales de Puerto de la Cruz (10) y La Orotava (8).*
- Que la efectividad de la unificación queda supeditada a la aprobación de un real decreto que así lo disponga tal como sale de la disposición final trigésima cuarta de la LO 1/2025: «Establecimiento reglamentario de la fecha de efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. Dentro del año siguiente al de entrada en vigor de esta ley, se establecerá reglamentariamente la fecha de efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, a fin de determinar el conocimiento por los órganos judiciales afectados por dicha modificación de los asuntos asignados y que se encontraran en tramitación hasta su conclusión, las relaciones de puestos de*

trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como cualquier otro aspecto necesario para la correcta y plena eficacia de la modificación de la demarcación judicial acordada.»

- Que, de no dictarse el real decreto de unificación antes del día 1 de julio de 2025, por aplicación de la disposición transitoria primera de la LO 1/2025, en tal fecha deberían constituirse de manera independiente los tribunales de instancia de La Orotava y de Puerto de la Cruz, con los trámites que ello conlleva, que resultarían inútiles una vez acordada la efectividad de la unificación.*

Por todo ello, asumiendo la propuesta del presidente, la Sala acuerda dirigir comunicación al Ministerio de Justicia a fin de que, a la mayor brevedad posible:

a. Se acuerde la efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, aprobado por la LO 1/2025 en lo que respecta al partido judicial de La Orotava.

b. Al contar dicho partido judicial con 8 plazas, se dicte la correspondiente orden ministerial por la que se establezca la elevación a categoría de magistrado/a de las plazas del tribunal de instancia de La Orotava.

c. Que, con arreglo al informe y acuerdo previo de esta Sala n.º 84/2022, de 11 de marzo, sobre unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz, máxime teniendo en cuenta la ampliación de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, se cree una plaza más en el Tribunal de Instancia de La Orotava para el conocimiento de los asuntos de dicha clase, plaza que extendería su jurisdicción al partido judicial de Icod de los Vinos, para culminar así el proceso de comarcalización de los asuntos en materia de violencia sobre la mujer en la isla de Tenerife.

La inmediata efectividad de las previsiones contempladas en la LO 1/2025, tal como ha solicitado la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, implicará la puesta en marcha de un único tribunal de instancia de La Orotava el cual, territorialmente, abarcará los actuales partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz.

Siguiendo el criterio que hemos mantenido en el acuerdo n.º 47/2025 transcrito, siendo que el tribunal de primera instancia de La Orotava pasará a contar con 8 plazas judiciales, deberá dictarse la correspondiente orden ministerial por la que se establezca la elevación a categoría de magistrado/a de las plazas judiciales del tribunal referido, y, además, acordarse la separación de jurisdicciones, toda vez que tal número de plazas judiciales es suficiente para **proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias la constitución de una sección civil y de una sección de instrucción en el tribunal de instancia de La Orotava, garantizando la debida especialización y mejor atención de los asuntos.**

En materia de violencia sobre la mujer, los datos de violencia sobre la mujer y violencia sexual del año 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
OROTAVA	555	96	96	747
PUERTO DE LA CRUZ	203	9	74	286
ICOD DE LOS VINOS	51	17	37	105
TOTAL				1138

Partiendo de los datos del año 2024 y teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, siguiendo los criterios aprobados por la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias aludidos en este apartado, así como en los antecedentes de esta resolución, con base en el art. 89.2 y 89.3 LOPJ, **se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la creación, en el tribunal de instancia de La Orotava, de una sección de violencia sobre la mujer, dotada de una nueva plaza judicial, que extienda su jurisdicción al partido judicial de Icod de los Vinos.**

La creación de una sección de violencia sobre la mujer en el Tribunal de Instancia de La Orotava seguiría el adecuado modelo de especialización, exclusividad, organización y estructura que existe en San Bartolomé de Tirajana, partido judicial este en el que el juzgado de violencia sobre la mujer único tuvo una entrada, en 2024, de 1255 asuntos, esto es, próxima a los 1138 casos computados anteriormente para la Orotava, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos.

La necesidad de optar por la constitución de secciones de violencia sobre la mujer es imprescindible a tenor de los siguientes criterios cualitativos que deben que tenerse en cuenta:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Especialización que debe darse tanto en el juzgador/a, como en la estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como el servicio de guardia.
- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las

respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.

- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.
- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales)
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocido un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de las secciones existentes actualmente, así como a la regulación vigente del Servicio de guardia.

2.4. LANZAROTE

2.4.1. PARTIDO JUDICIAL DE ARRECIFE

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. ESPECIALIZACIÓN PLENA EN ISLA NO CAPITALINA

El partido judicial de Arrecife cuenta con 4 juzgados de instrucción que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las cuatro plazas judiciales subsumidas en la sección de instrucción del tribunal de instancia de Arrecife.

Uno de tales juzgados de instrucción es el que asume de forma exclusiva y no excluyente el conocimiento de los asuntos en materia de violencia sobre la

mujer, modelo que se mantiene en la LO 1/2025 para el tribunal de instancia de Arrecife.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual correspondientes al año 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
ARRECIFE	731	127	389	1247
TOTAL				1247

Partiendo de los datos del año 2024 y teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, y a tenor de los acuerdos de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias aludidos en este apartado, así como en los antecedentes de este informe, con base en el art. 89.2 LOPJ, **se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la creación, en el tribunal de instancia de Arrecife, de una sección de violencia sobre la mujer.**

La nueva plaza judicial de la sección de violencia sobre la mujer **no puede proceder de la transformación de una de las plazas judiciales de la sección de instrucción del tribunal de instancia toda vez que en el año 2024 cada uno de los juzgados de instrucción de Arrecife tuvo una entrada de 3831 casos, por lo que superan el módulo de 3300 asuntos establecido, incluso descontando los delitos sexuales computados en el partido judicial (389 en total, esto es, 98 por juzgado).**

La creación de una sección de violencia sobre la mujer en el tribunal de instancia de Arrecife, implicaría la implantación de un modelo de especialización plena en una isla no capitalina, consiguiéndose así una respuesta homogénea como la que se dispensa en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana a través del juzgado de violencia sobre la mujer único, que tuvo una entrada, en 2024, de 1255 asuntos, esto es, próxima a los 1247 casos computados anteriormente para Arrecife.

Además, conforme a los informes remitidos desde el juzgado decano de Arrecife, se están ejecutando en el Palacio de Justicia de Arrecife instalaciones específicas preparadas para la atención de los asuntos de violencia sobre la mujer, cumpliendo específicamente con lo dispuesto en el art. 89.10 LOPJ.

Debe tenerse en consideración que el actual modelo de competencias exclusivas y no excluyentes no está dando adecuados resultados en el partido judicial, porque no garantiza la especialización plena y la mejor atención/calidad del servicio en materias tan sensibles y complejas, en una isla como Lanzarote, con datos de entrada de asuntos desproporcionados, máxime en atención a la prevalencia del elemento extranjero. Prueba de ello es la

existencia de un juez de refuerzo en el órgano que asume actualmente las competencias en materia de violencia sobre la mujer, lo que respalda la necesidad de una nueva plaza judicial en los términos propuestos.

La necesidad de optar por la constitución de secciones de violencia sobre la mujer es imprescindible a tenor de los siguientes criterios cualitativos que deben que tenerse en cuenta:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Especialización que debe darse tanto en el juzgador/a, como en la estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como el servicio de guardia.
- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.
- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.
- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales)
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocido un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de la secciones

existentes actualmente, así como a la regulación vigente del Servicio de guardia.

b) VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: ESPECIALIZACIÓN EN UNA ISLA NO CAPITALINA

En materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, si extrapolamos al partido judicial de Arrecife el sistema de cálculo obrante en el informe, adjunto al presente como anexo I, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias (acuerdo n.º 224/24), se obtienen para Lanzarote los siguientes datos:

PARTIDO JUDICIAL	HABITANTES	DELITOS CONTRA MENORES	TOTAL ASUNTOS	DELITOS CONTRA MENORES
ARRECIFE	163467	244	15.322 (sin contar viogen)	278
TOTAL		244		278

Se trata, en contraste con los restantes datos obrantes en el informe anexo, de datos destacados que sitúan al partido judicial de Arrecife (islas de Lanzarote y La Graciosa) en cifras similares, e incluso ligeramente superiores, a las referidas a partidos judiciales como Arona, San Bartolomé de Tirajana o Telde y solo ligeramente inferiores a partidos judiciales como San Cristóbal de La Laguna o Santa Cruz de Tenerife.

Como se indicaba anteriormente, los juzgados de instrucción de Arrecife han registrado una entrada superior al módulo establecido (3300), habiendo ingresado, en 2024, 3831 casos por juzgado de instrucción (sin contar los asuntos penales de VSM, 3733 asuntos si descontamos los delitos sexuales 2024 por juzgado de instrucción).

La creación de una sección de violencia sobre la mujer en el tribunal de instancia de Arrecife, integrada por una nueva plaza judicial, manteniéndose las necesarias cuatro plazas judiciales de la sección de instrucción, permite, a su vez, atendiendo a los datos expuestos, acudir al mecanismo del art. 89 bis.1 LOPJ, **por lo que se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que se atribuya el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia, dispuestos en el art. 89 bis LOPJ, a una de las plazas de la sección de instrucción de forma exclusiva pero no excluyente, ello sin perjuicio de las compensaciones o exenciones de reparto que procedan.**

La adopción de ambas medidas permitirá trasladar el modelo de necesaria especialización, en materias tan sensibles y complejas, a una isla no capitalina, mejorando, de forma destacada, la calidad del servicio.

2.5. FUERTEVENTURA

2.5.1. PARTIDO JUDICIAL DE PUERTO DEL ROSARIO

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. SEPARACIÓN DE JURISDICCIONES. ESPECIALIZACIÓN PLENA EN ISLA NO CAPITALINA

La Sala de Gobierno del TSJ de Canarias dispuso, en su reciente acuerdo 48/2025, reunión de fecha 20 de febrero de 2025:

La Sala de Gobierno acuerda reiterar al Ministerio de Justicia la petición de que se proceda a dictar a la mayor brevedad el correspondiente real decreto por el que se disponga la separación de los juzgados de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario, presupuesto indispensable para que se pueda definir y acomodar la estructura de dicho partido judicial a las previsiones de la LO 1/2025.

Efectuado lo anterior, en lo que se refiere a violencia sobre la mujer, los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual correspondientes al año 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
Puerto del Rosario	929	157	150	1236
TOTAL				1236

Partiendo de los datos del año 2024, teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, y los acuerdos de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias aludidos en este apartado, así como en los antecedentes de esta resolución, con base en el art. 89.2 LOPJ, **se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la creación, en el Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, de una sección de violencia sobre la mujer.**

La creación de una sección de violencia sobre la mujer en el tribunal de instancia de Puerto del Rosario supondría implantar un modelo de especialización plena en una isla no capitalina, consiguiendo así el adecuado

modelo de especialización, exclusividad, organización y estructura, en términos análogos al partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, en el que el juzgado de violencia sobre la mujer único tuvo una entrada, en 2024, de 1255 asuntos, esto es, próxima a los 1236 casos computados anteriormente para Puerto del Rosario.

Debe tenerse en consideración que el partido judicial de Puerto del Rosario, una vez se haga efectiva la separación de jurisdicciones, ha de seguir el camino del partido judicial de Arrecife, por presentar similares características. Como ha quedado expuesto, el actual modelo de competencias exclusivas y no excluyentes no está dando adecuados resultados, porque no garantiza la especialización plena y la mejor atención del servicio en materias tan sensibles y complejas. Razonamientos extensibles a una isla como Fuerteventura, con datos de entrada de asuntos también desproporcionados en atención a su población. Además del factor cuantitativo, debe tenerse en cuenta en estas dos islas no capitalinas, igual que sucede en el sur de Tenerife y de Gran Canaria, la enorme complejidad en la instrucción de los asuntos en materia de violencia sobre la mujer por la abrumadora presencia del elemento extranjero.

La necesidad de optar por la constitución de secciones de violencia sobre la mujer es imprescindible a tenor de los siguientes criterios cualitativos que deben tenerse en cuenta:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer. Especialización que debe darse tanto en el juzgador/a, como en la estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como el servicio de guardia.
- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.
- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.

- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales)
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocido un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de las secciones existentes actualmente, así como a la regulación vigente del Servicio de guardia.

b) VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: ESPECIALIZACIÓN EN UNA ISLA NO CAPITALINA

En materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, si extrapolamos al partido judicial de Puerto del Rosario, el sistema de cálculo obrante en el informe, adjunto al presente como anexo I, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias (acuerdo n.º 224/24), se obtienen para Fuerteventura los siguientes datos:

PARTIDO JUDICIAL	HABITANTES	DELITOS CONTRA MENORES	TOTAL ASUNTOS	DELITOS CONTRA MENORES
Puerto del Rosario	127043	190	9.324 (sin contar viogen)	169
TOTAL		190		169

La separación de jurisdicciones y creación de una sección de violencia sobre la mujer en el tribunal de instancia de Puerto del Rosario, integrada por una plaza judicial, permite, a su vez, atendiendo a los datos expuestos, acudir al mecanismo del art. 89 bis.1 LOPJ, **por lo que se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia, dispuestos en el art. 89 bis LOPJ, corresponda a una de las plazas de la sección de instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones, de forma exclusiva pero no excluyente.**

La adopción de ambas medidas permitirá trasladar el modelo de necesaria especialización, en materias tan sensibles y complejas, a una isla no capitalina, mejorando, de forma destacada, la calidad del servicio.

2.6. LA PALMA

2.6.1. PARTIDO JUDICIAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El partido judicial de Santa Cruz de La Palma cuenta, actualmente, con dos juzgados mixtos que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las dos plazas judiciales subsumidas en la sección única (mixta) del tribunal de instancia de Santa Cruz de La Palma.

La LO 1/2025 mantiene que a una de esas dos plazas judiciales de la sección única del tribunal le corresponda el conocimiento de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual del año 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
SANTA CRUZ DE LA PALMA	129	11	41	181
TOTAL				181

En materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, si extrapolamos al partido judicial de Santa Cruz de La Palma el sistema de cálculo obrante en el informe, adjunto al presente como anexo I, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias (acuerdo n.º 224/24), se obtienen los siguientes datos:

PARTIDO JUDICIAL	HABITANTES	DELITOS CONTRA MENORES	TOTAL ASUNTOS	DELITOS CONTRA MENORES
SANTA CRUZ DE LA PALMA	42427	64	2669 (sin contar viogen)	49
TOTAL		64		49

Concurriendo ya especialización parcial en materia de violencia sobre la mujer, se estima necesario acudir al mecanismo del art. 89 bis.1 LOPJ, para garantizar también dicha especialización parcial en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, constituyéndose la especialización, en estas materias sensibles y complejas, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio.

En consecuencia, **se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia, dispuestos en el art. 89 bis LOPJ, corresponda, de forma exclusiva pero no excluyente, a la plaza judicial que ya tiene atribuida el conocimiento, también de forma exclusiva pero no excluyente, de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer.**

Con los datos expuestos ello supone 245 asuntos (en total, sumando violencia sobre la mujer y sobre la infancia y la adolescencia), correspondiendo a la Junta de Jueces acordar y elevar propuesta de compensación/exención del reparto.

2.6.2. PARTIDO JUDICIAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE

a) VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El partido judicial de Los Llanos de Aridane cuenta, actualmente, con dos juzgados mixtos que, conforme a la LO 1/2025, pasarán a integrarse en las dos plazas judiciales subsumidas en la sección única (mixta) del Tribunal de Instancia de Los Llanos de Aridane.

La LO 1/2025 mantiene que a una de esas dos plazas judiciales de la sección única del tribunal le corresponda el conocimiento de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.

Los datos en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual 2024, son los siguientes:

PARTIDO JUDICIAL	ASUNTOS PENALES VIOGEN 2024	ASUNTOS CIVILES VIOGEN 2024	DELITOS SEXUALES 2024	TOTAL DE ASUNTOS 2024
LOS LLANOS	190	17	23	230
TOTAL				230

En materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, si extrapolamos al partido judicial de Los Llanos, el sistema de cálculo obrante en el informe, adjunto al presente como anexo I, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJ de

Canarias (acuerdo n.º 224/24), se obtienen para Los Llanos de Aridane los siguientes datos:

PARTIDO JUDICIAL	HABITANTES	DELITOS CONTRA MENORES	TOTAL ASUNTOS	DELITOS CONTRA MENORES
LOS LLANOS	41448	62	2875 (sin contar viogen)	53
TOTAL		62		53

Concurriendo ya especialización parcial en materia de violencia sobre la mujer, se estima necesario acudir al mecanismo del art. 89 bis.1 LOPJ, para garantizar también dicha especialización parcial en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia, constituyéndose la especialización, en estas materias sensibles y complejas, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio.

En consecuencia, **se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia, dispuestos en el art. 89 bis LOPJ, corresponda, de forma exclusiva pero no excluyente, a la plaza judicial que ya tiene atribuida el conocimiento, también de forma exclusiva pero no excluyente, de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer.**

Con los datos expuestos ello supone 292 asuntos (en total, sumando violencia sobre la mujer y sobre la infancia y la adolescencia), correspondiendo a la Junta de Jueces acordar y elevar propuesta de compensación/exención del reparto.

2.7. LA GOMERA Y EL HIERRO

En materia de violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia y la adolescencia, las modificaciones introducidas por la LO 1/2025 no inciden en los partidos judiciales de San Sebastián de La Gomera, ni en el de Valverde, al tener exclusivamente una plaza judicial, en sección única, cada uno.

3. NECESIDADES COMUNES

Procede establecer las siguientes **necesidades comunes** respecto a todos los tribunales de instancia de Canarias con competencias en materia de violencia

sobre la mujer y violencia contra la infancia y la adolescencia y dirigir las siguientes comunicaciones:

- Al CGPJ y al Gobierno de Canarias para que se adopten las medidas previstas en los arts. 89.10 y 89.bis 6 LOPJ (dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso).
- Al Gobierno de Canarias para que se dote a dichos tribunales de salas *Gesell*, salas de espera de menores, salas de tomas de declaración a víctimas de violencia sobre la mujer y salas de espera de víctimas debidamente acondicionadas. Especialmente deficiente y grave es la situación actual de la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife.
- Al Gobierno de Canarias para que proceda a la creación de las oficinas de atención a las víctimas y a la dotación de equipos psicosociales para la atención inmediata y preferente de estos asuntos.
- Al Gobierno de Canarias para que proceda a la plena implantación de los medios telemáticos, así como la adopción urgente de las medidas necesarias para dotar a todos los tribunales de instancia de los medios necesarios para una atención pronta y especializada, en materia de violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia y la adolescencia, por parte de los IMLyCF.
- Al Gobierno de Canarias, para que arbitre los medios a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional 23 LOPJ (transporte para el traslado a otro partido judicial en los supuestos previstos en los arts. 86.2, 89.3 y 89 bis.3 LOPJ, es decir, en los casos de comarcalización de las secciones de familia, violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia).
- A las presidencias de los tribunales de instancia para que promuevan la elaboración, aprobación en junta de jueces y elevación a la Sala de Gobierno, de protocolos de atención/guías de actuación, en el tribunal correspondiente, respecto a las víctimas menores de edad y de violencia sobre la mujer, así como de los protocolos de coordinación que fueran necesarios en materia de violencia sobre la mujer/violencia contra la infancia y la adolescencia (como pudiera ser, a modo de ejemplo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales o con el Servicio Canario de Salud).

4. PROPUESTA QUE FORMULA LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE CANARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA LO 1/2025, DE 2 DE ENERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA.

A la vista de los antecedentes expuestos, la Comisión de Estudio de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, para la implantación de la LO 1/2025, integrada por el Exmo. Sr. presidente del TSJ de Canarias, así como por los Ilmos. Sres. decanos de los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, como miembros de Sala de Gobierno, proponen al Pleno de la misma, la adopción del siguiente acuerdo:

La Sala de Gobierno, ante la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, con el aumento de competencias que implica para los órganos con competencia en materia de violencia sobre la mujer, en lo relativo a necesidades en dicha materia así como en la violencia contra la infancia y la adolescencia, acuerda aprobar y hacer suyo el informe elaborado por la Comisión de Estudio integrada por D. Juan Luis Lorenzo Bragado, D.^a Ana Esmeralda Casado Portilla, D. Juan Avello Formoso y D. Adalberto de la Cruz Correa, que se une como anexo al presente.

La Sala de Gobierno considera necesaria la **especialización en materia de violencia sobre la mujer**, presupuesto ineludible para la debida atención de estos asuntos, debiendo tenerse en cuenta no solo el incremento de la competencia de las secciones y plazas de VSM, sino la realidad insular y la alta litigiosidad de Canarias, y ello con la finalidad de:

- Garantizar un servicio de calidad, exclusivo y plenamente especializado en materias tan sensibles como la violencia sobre la mujer y la violencia contra la infancia y la adolescencia. Especialización que debe darse tanto en quienes juzgan, como en la estructura y organización de la oficina judicial, sin verse afectado por otros servicios específicos, como el servicio de guardia.
- La especial duración de las diligencias precisas para formalizar los testimonios atendiendo a los siguientes factores: i) la especial vulnerabilidad de las afirmadas víctimas; ii) el impacto emocional que el relato de sucesos que afectan a su más estricta intimidad provoca en las mismas, lo que exige la máxima exquisitez en la formulación de las preguntas y el pleno respeto a las dinámicas de tiempo personal en las respuestas); iii) la necesidad de que el relato sea lo más completo posible para obtener la máxima información de quien constituye la prueba de cargo fundamental en aras a evitar la revictimización que pudiera generarse por la reiteración de declaraciones en la misma fase procesal, y iv) la necesidad de cumplir las garantías de defensa en la declaración del investigado.

- La ineludible necesidad de cumplir con las exigencias legales de acogida, apoyo y acompañamiento en la declaración de las afirmadas víctimas lo que supone su adecuada planificación, así como la articulación y la gestión de los espacios para evitar las interacciones directas.
- La complejidad de la instrucción que precisa de la obtención, en el menor tiempo posible para evitar su desaparición o contaminación, de un elenco de fuentes de prueba de diversos organismos e instituciones (sanitarios, sociales, médico legales)
- La frecuente necesidad de adoptar órdenes de protección y otras medidas cautelares, lo que obliga a la realización de trámites procesales imperativos (comparecencias de los involucrados y de terceras personas, así como alegatos de las partes) así como la elaboración de decisiones judiciales motivadas sobre las peticiones efectuadas.
- La incidencia que el número de actuaciones a realizar provoca en la prolongación de jornadas de trabajo de estas secciones más allá del horario de audiencia sin estar reconocido un servicio de guardia específico, atendiendo al número de integrantes de las secciones existentes actualmente, así como a la regulación vigente del servicio de guardia.

Con base en lo anterior, así como en lo dispuesto en los arts. 89 y 89 bis LOPJ, tomando en consideración los criterios cuantitativos y cualitativos expuestos, se acuerda:

1. En lo que respecta a los tribunales de instancia de Canarias con competencia en materia de **violencia sobre la mujer**:

a. Proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias la creación de las siguientes nuevas plazas judiciales, en secciones de violencia sobre la mujer ya constituidas en los tribunales de instancia, informando negativamente, atendidos los datos estadísticos de las plazas judiciales de las secciones de instrucción de los tribunales de instancia, la transformación o conversión de plazas judiciales:

- 1.** Una cuarta plaza judicial en la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de **Las Palmas de Gran Canaria**.
- 2.** Una tercera plaza judicial en la sección de violencia sobre la mujer en el tribunal de instancia de **Santa Cruz de Tenerife**.
- 3.** Una segunda plaza judicial en la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de primera instancia de **Arona**.

- b. Proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, con base en el art. 89.2 LOPJ, la creación de una sección de violencia sobre la mujer, integrada por una nueva y única plaza judicial, en el tribunal de instancia de Arrecife, informando negativamente, atendidos los datos estadísticos de las plazas judiciales de las secciones de instrucción de los tribunales de instancia, a la transformación o conversión de plazas judiciales.
- c. Respecto a los partidos judiciales de **La Orotava y Puerto de la Cruz**:
1. Solicitar al Ministerio de Justicia que se acuerde la efectividad de la modificación parcial del anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, aprobado por la LO 1/2025 en lo que respecta al partido judicial de La Orotava.
 2. Solicitar al Ministerio de Justicia que, al contar dicho partido judicial con 8 plazas, se dicte la correspondiente orden ministerial por la que **se establezca la elevación a categoría de magistrado/a** de las plazas del tribunal de instancia de La Orotava.
 3. Proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias la **constitución de una sección civil y de una sección de instrucción en el Tribunal de Instancia de La Orotava**, garantizando la debida especialización y mejor atención de los asuntos.
 4. Con base en los arts. 89.2 y 89.3 LOPJ, proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la **creación, en el Tribunal de Instancia de La Orotava, de una sección de violencia sobre la mujer, dotada de una nueva plaza judicial, que extienda su jurisdicción al partido judicial de Icod de los Vinos, culminándose así la comarcalización en materia de violencia sobre la mujer en la isla de Tenerife.**
- d. Respecto al **partido judicial de Puerto del Rosario**:
1. Reiterar al Ministerio de Justicia la petición de que se proceda a dictar a la mayor brevedad el correspondiente **real decreto por el que se disponga la separación de separación de los juzgados de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario, presupuesto indispensable para que se pueda definir y acomodar la estructura de dicho partido judicial a las previsiones de la LO 1/2025.**

2. Proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, con base en el art. 89.2 LOPJ, la **creación de una sección de violencia sobre la mujer, integrada por una nueva y única plaza judicial, en el tribunal de instancia de Puerto del Rosario.**

2. En lo que respecta a los tribunales de instancia con competencia en materia de **violencia contra la infancia y la adolescencia:**

a. Gran Canaria

Con base en los arts. 89 bis.2 y 89 bis.3 LOPJ, proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la **creación de una nueva plaza judicial en la sección de instrucción del tribunal de instancia de Las Palmas de Gran Canaria y, paralelamente, la creación de una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia en el mencionado tribunal, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Gran Canaria, sección integrada por una única plaza judicial que procederá de la transformación de la plaza judicial n.º 3 de la sección de instrucción.**

b. Tenerife

Con base en los arts. 89 bis.2 y 89 bis.3 LOPJ, proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias, la **creación de una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia, dotada de una nueva plaza judicial, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Tenerife, en el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife o en el de San Cristóbal de La Laguna, informando negativamente, atendidos los datos estadísticos de las plazas judiciales de las secciones de instrucción de los tribunales de instancia, la transformación o conversión de plazas judiciales.** Sección de violencia contra la infancia y la adolescencia a la que se deberá dotar de los mismos medios con los que cuenta el actual Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

c. Lanzarote (partido judicial de Arrecife)

Una vez constituida la sección de violencia sobre la mujer en el Tribunal de Instancia de Arrecife referida anteriormente, se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que se acuerde que el **conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia (art. 89 bis LOPJ) corresponda a una de las plazas de la**

sección de instrucción de forma exclusiva pero no excluyente.

d. Fuerteventura (partido judicial de Puerto del Rosario)

Una vez separadas las jurisdicciones y constituida la sección de violencia sobre la mujer en el tribunal de instancia de Puerto del Rosario referida anteriormente, se acuerda proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que se acuerde que el **conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia (art. 89 bis LOPJ) corresponda a una de las plazas de la sección de instrucción de forma exclusiva pero no excluyente.**

e. La Palma

Proponer al CGPJ, Ministerio de Justicia y Gobierno de Canarias que se acuerde, **tanto para el partido judicial de Santa Cruz de La Palma, como para el partido judicial de Los Llanos de Aridane, que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia (art. 89 bis LOPJ) corresponda, de forma exclusiva pero no excluyente, a la plaza judicial que ya tiene atribuida el conocimiento, también de forma exclusiva pero no excluyente, de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer**

Efectuado lo anterior corresponderá a las juntas de cada partido acordar y elevar propuesta de compensación o exención de reparto.

3. Establecer las siguientes **necesidades comunes** respecto a todos los tribunales de instancia de Canarias con competencias en materia de violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia y la adolescencia y dirigir las siguientes comunicaciones:

- Al CGPJ y al Gobierno de Canarias para que se adopten las medidas previstas en los arts. 89.10 y 89.bis 6 LOPJ (dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso).
- Al Gobierno de Canarias para que se dote a dichos tribunales de salas *Gesell*, salas de espera de menores, salas de tomas de declaración a víctimas de violencia sobre la mujer y salas de espera de víctimas debidamente acondicionadas. Especialmente deficiente y grave es la situación actual de la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife.

- Al Gobierno de Canarias para que proceda a la creación de las oficinas de atención a las víctimas y a la dotación de equipos psicosociales para la atención inmediata y preferente de estos asuntos.
- Al Gobierno de Canarias para que proceda a la plena implantación de los medios telemáticos, así como la adopción urgente de las medidas necesarias para dotar a todos los tribunales de instancia de los medios necesarios para una atención pronta y especializada, en materia de violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia y la adolescencia, por parte de los IMLyCF.
- Al Gobierno de Canarias, para que arbitre los medios a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional 23 LOPJ (transporte para el traslado a otro partido judicial en los supuestos previstos en los arts. 86.2, 89.3 y 89 bis.3 LOPJ, es decir, en los casos de comarcalización de las secciones de familia, violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia).
- A las presidencias de los tribunales de instancia para que promuevan la elaboración, aprobación en junta de jueces y elevación a la Sala de Gobierno, de protocolos de atención/guías de actuación, en el tribunal correspondiente, respecto a las víctimas menores de edad y de violencia sobre la mujer, así como de los protocolos de coordinación que fueran necesarios en materia de violencia sobre la mujer/violencia contra la infancia y la adolescencia (como pudiera ser, a modo de ejemplo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales o con el Servicio Canario de Salud).

Remítase certificación de este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2025

D. JUAN LUIS LORENZO BRAGADO
D.ª ANA ESMERALDA CASADO PORTILLA
D. JUAN AVELLO FORMOSO
D. ADALBERTO DE LA CRUZ CORREA

MIEMBROS DE SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE CANARIAS E
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN
DE LA LO 1/2025